PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA FUNCIONARIZACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 3 DE MARZO 2023

EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

GRUPOS A Y B

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST

1. **¿Cuál de estas materias NO puede ser objeto de negociación según el artículo 37 del TREBEP?**

    a. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
    b. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
    c. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
    d. Las modalidades de provisión de puestos de trabajo.

2. **¿Cuántos días de permiso tiene un funcionario por traslado de domicilio sin cambio de residencia?**

    a. Un día.
    b. Dos días.
    c. Tres días.
    d. Cuatro días.

3. **¿Cuál de las siguientes materias NO pueden ser objeto de negociación colectiva?**

    a. El calendario laboral.
    b. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias.
    c. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
    d. Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

4. **¿Cuál de los siguientes NO es un principio rector del acceso al empleo público según el artículo 55 del TREBEP?**

    a. Transparencia.
    b. Mérito.
    c. Estabilidad.
    d. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

5. **¿Cuál es la titulación mínima requerida para el acceso al Grupo B de clasificación profesional de los funcionarios?**

    a. Título de Máster Universitario.
    b. Título de Técnico Superior.
    c. Título de Grado Universitario.
    d. Título de Bachiller o Técnico.

6. **Según el artículo 49 del RD 364/1995, un destino adjudicado tras la participación en un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo:**

    a. Es irrenunciable salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
    b. Se puede renunciar a él tras un periodo de prueba de 3 meses.
    c. Se puede renunciar a él tras un periodo de prueba de 1 mes.
    d. Es irrenunciable salvo que en la próxima evaluación del desempeño se emita un informe desfavorable del funcionario en su nuevo puesto.

7. **Señala cuál de las siguientes NO es una característica de las comisiones de servicio:**

    a. Su duración es temporal.
    b. Supone la cobertura definitiva del puesto.
    c. Se utiliza para cubrir puestos vacantes.
    d. Es una forma de provisión de puestos.

8. **¿Cuál es la duración de una comisión de servicios?**

    a. Indefinida.
    b. Máximo 1 año.
    c. Máximo 1 año, prorrogable por 1 año adicional en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.
    d. Máximo 2 años, prorrogable por 1 año adicional en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.

9. **Señala la respuesta INCORRECTA con relación a la comisión de servicios:**

    a. Es un sistema de provisión de puestos de trabajo.
    b. El funcionario percibe la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo realmente desempeñan.
    c. Al funcionario en comisión de servicios no se le reserva el puesto de trabajo de origen.
    d. Procede su uso en supuestos de urgente e inaplazable necesidad.

10. **En el caso de cesar de un puesto de libre designación que se obtuvo en otra Administración, si la Administración de destino no tiene dónde adscribir al funcionario cesado, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el funcionario para solicitar el reingreso al servicio activo en la Administración de origen?**

    a. 2 años.
    b. 1 mes.
    c. 10 años.
    d. 24 horas.

11. ¿Qué puesto NO podría ocupar un funcionario del grupo A2 (anterior grupo B)?

a. Un puesto de nivel 27.
b. Un puesto de nivel 26.
c. Un puesto de nivel 22.
d. Un puesto de nivel 16.

12. Los funcionarios de un Cuerpo o Escala del Grupo A2 pueden ocupar puestos cuyos niveles sean de los intervalos:

a. 16 – 26
b. 18 – 26
c. 18 – 27
d. 15 – 25

13. Un puesto de nivel 22 puede ser ocupado por:

a. Solo funcionarios del Grupo A2.
b. Solo funcionarios del Grupo A1.
c. Funcionarios del Grupo C1, A2 y A1.
d. Funcionarios del Grupo C2, C1 y A2.

14. Un funcionario que ocupó un puesto nivel 18 durante 18 meses, luego un puesto de nivel 20 durante 6 meses para, finalmente, volver a ocupar un puesto de nivel 18, ¿qué grado consolidado tiene a los cinco años?

a. Nivel 18.
b. Nivel 20.
c. Nivel 19.
d. Nivel 24.

15. Según el artículo 8.1 del RD 365/1995, en el caso de los trienios de los funcionarios en situación de servicios especiales, ¿quién los abona?

a. La Administración en la que el funcionario se encuentre prestando servicios.
b. La Administración de origen del funcionario.
c. Por la Administración en la que el funcionario se encuentra prestando servicios, salvo que por causa legal no pudiera abonarlos, en cuyo caso no tendrá derecho a su percepción.
d. Por la Administración en la que el funcionario se encuentra prestando servicios, salvo que por causa legal no pudiera abonarlos, en cuyo caso lo habrá de abonar la Administración en la que desempeñaba su último puesto de trabajo en situación de servicio activo.

16. ¿Qué ocurre si un funcionario interino supera el proceso selectivo de ingreso a una Escala de otra Administración y pasa a prestar servicios en ella?

a. Que en la Administración de origen queda en situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público.
b. Que en la Administración de origen cesa en su puesto sin mantener ninguna vinculación.
c. Que en la Administración de origen queda en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
d. Que en la Administración de origen queda en situación de servicios en otras Administraciones Públicas.

17. La situación administrativa de suspensión de funciones implica:

a. Únicamente la suspensión de la obligación de prestar servicios.
b. Únicamente la suspensión del derecho a la percepción de retribuciones.
c. Todos los derechos inherentes a la condición de funcionario.
d. La pérdida de empleo y sueldo pero conservando derechos retributivos adquiridos como los trienios o el complemento de destino del nivel grado personal consolidado.

18. Según los Estatutos de la UAM, señalar cuál NO es un principio rector de la gestión de la Universidad:

a. Respeto al medio ambiente.
b. Eficacia.
c. Calidad.
d. Proporcionalidad.

19. Según los Estatutos de la UAM, la Junta Consultiva es el órgano ordinario de asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobierno en:

a. Materia académica y presupuestaria.
b. Exclusivamente en materia académica.
c. Exclusivamente en materia presupuestaria.
d. En materia académica, organizativa y presupuestaria.

20. De acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos de la Universidad, ¿qué órgano tiene la competencia de acordar las modificaciones presupuestarias no reservadas a ningún otro órgano universitario?

a. El Consejo Social.
b. El Rector/a.
c. El Consejo de Gobierno.
d. El Claustro Universitario.

21. De acuerdo con el artículo 70 de los Estatutos de la UAM, ¿qué tipo de contrato tienen los profesores asociados en la Universidad Autónoma de Madrid?

a. Temporal con dedicación a tiempo completo.
b. Temporal con dedicación a tiempo parcial.
c. Indefinido con dedicación a tiempo completo.
d. Indefinido con dedicación a tiempo parcial.

22. De acuerdo con los Estatutos de la UAM, qué actos administrativos de qué órganos de gobierno, representación y administración serán recurribles en alzada ante el Rector:

a. Los acuerdos del Claustro Universitario.
b. Los acuerdos del Consejo Social.
c. Los acuerdos del Consejo de Gobierno.
d. Las resoluciones de los Decanos de Centro.

23. De acuerdo con los Estatutos de la UAM, cuál de las siguientes figuras de personal docente e investigador tiene vinculación permanente:

a. Ayudante Doctor.
b. Asociado.
c. Contratado doctor.
d. Ayudante.

24. ¿Qué es la relación de puestos de trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid, tal como se definen en los Estatutos de la UAM?

a. Un documento legal que establece los derechos y deberes del personal de administración y servicios.
b. Una lista de los puestos de trabajo vacantes en la Universidad.
c. Un instrumento técnico para ordenar el personal de administración y servicios de acuerdo con la legislación aplicable.
d. Ninguna de las anteriores.

25. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se considera discriminación indirecta por razón de sexo:

a. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
b. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en situación de igualdad con respecto a personas del otro.
c. La situación en que una persona es tratada igual que otra en situación comparable.
d. La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable.

26. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el sistema educativo incluirá:

a. Entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
b. Entre sus fines la educación en la desigualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
c. Dentro de sus principios de calidad, el fomento de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
d. Dentro de sus principios de calidad, el fomento de la presencia igualitaria de mujeres y hombres.

27. En el ámbito de la educación superior, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

a. Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de las mujeres en la historia.
b. Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
c. Las Administraciones públicas fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de los derechos de las mujeres.
d. Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de las materias que les son propias.

28. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, los planes de igualdad de las empresas:

a. Son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación.
b. Buscan alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
c. Fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar y las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución.
d. Todas son correctas.

29. El diagnóstico previo a la adopción de los planes de igualdad regulados en Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, deberá contener las siguientes materias (señala la <u>INCORRECTA</u>):

a. Disgregación por sexo del número de trabajadoras y trabajadores.
b. Formación.
c. Promoción profesional.
d. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

30. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el distintivo para las empresas en materia de igualdad:

a. Será creado por cada Administración Pública.
b. Sirve para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras.
c. No puede utilizarse en el tráfico comercial.
d. No puede utilizarse con fines publicitarios.

31. El Consejo de Participación de la Mujer:

a. Es un órgano colegiado de consulta y decisión.
b. Tiene como fin esencial servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
c. Es un órgano unipersonal de consulta y asesoramiento.
d. Es un órgano facultativo.

32. Según el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1:

a. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
b. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
c. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
d. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

33. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos, según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. En alzada.
b. Potestativamente en reposición.
c. En alzada y potestativamente en reposición.
d. Ninguna es correcta.

34. El recurso extraordinario de revisión procederá, según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1.
b. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
c. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1.
d. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

35. Según el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la interposición de recurso:

a. Deberá expresar las particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.
b. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que no se deduzca su verdadero carácter.
c. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
d. Todas son correctas.

36. La interposición de cualquier recurso, según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso.
b. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.
d. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.

37. El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición si el acto fuera expreso, a tenor del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será:

a. Cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
b. Un mes.
c. Dos meses.
d. Tres meses.

38. Transcurrido el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición, según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Únicamente podrá interponerse recurso en vía judicial.
b. Únicamente podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia de alzada.
c. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
d. Únicamente podrá interponerse recurso de alzada.

39. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos:

a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
d. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

40. ¿A qué fase del procedimiento de gestión del presupuesto de gastos corresponde el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Universidad, y que comporta la propuesta de pago correspondiente?

a. Compromiso de gasto.
b. Aprobación de gasto.
c. Reconocimiento de la obligación.
d. Ordenación del pago.

41. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia, según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio.
b. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio.
c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio.
d. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio.

42. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento:

a. De consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto.
b. De consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.
c. De consanguinidad dentro del tercero grado o de afinidad dentro del primero.
d. De consanguinidad dentro del primero grado o de afinidad dentro del tercero.

43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con las sanciones administrativas:

a. Si son de naturaleza pecuniaria, podrán implicar subsidiariamente privación de libertad.
b. Sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
c. Si no son de naturaleza pecuniaria podrán implicar directamente privación de libertad.
d. Sean o no de naturaleza pecuniaria podrán implicar, directa o indirectamente, privación de libertad.

44. La suplencia, a tenor del artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a. Implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
b. No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
c. Implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el en el BOE.
d. No implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el BOE.

45. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de:

a. El funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b. El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c. El funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
d. El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

46. Se entiende por actuación administrativa automatizada, a tenor del artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
b. Cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
c. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
d. Cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

47. Según se establece en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por:

a. Las Administraciones Públicas con otras Administraciones Públicas en todo caso.
b. Los organismos públicos con las entidades de derecho público vinculados o dependientes o de derecho privado.
c. Las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
d. Todas son correctas.

48. No tienen la consideración de convenios, a tenor del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar:

a. Con un objetivo común, siempre que supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
b. Con objetivos diferentes, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
c. Con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
d. Con objetivos diferentes, siempre que supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.

49. De acuerdo con la Ley 53/1984, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de:

a. Secretario General.
b. Vicerrector.
c. Director General.
d. Secretario de Estado.

50. De acuerdo con la Ley 53/1984, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

a. Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo A (A1) o personal de nivel equivalente.
b. Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D (C2) o personal equivalente.
c. Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo D (C2) o personal equivalente.
d. Un 25 por 100, para los funcionarios del grupo A (A1) o personal de nivel equivalente.

51. De acuerdo con la Ley 53/1984, la autorización de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del sector público:

a. Requerirá de informe previo favorable de los órganos competentes de ambos puestos.
b. Requerirá informe preceptivo y vinculante del órgano competente del primer puesto.
c. Requerirá informe previo favorable del órgano competente del segundo puesto.
d. Todas son correctas.

52. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984 NO podrá ejercer las actividades siguientes:

a. La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, con carácter general.
b. La participación superior al 5 por 100 en el capital de Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros del sector público.
c. El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades con participación o aval del sector público.
d. Todas son correctas.

53. El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá, de acuerdo con la Ley 53/1984:

a. La autorización del órgano competente por razones de interés público.
b. La previa autorización de compatibilidad.
c. El previo reconocimiento de compatibilidad.
d. Ninguna es correcta.

54. ¿Qué actividades están exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984?

a. Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar.
b. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales.
c. La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
d. Todas las anteriores.

55. A los que accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a la Ley 53/1984 resulte incompatible con el que vinieran desempeñando y optan por el nuevo puesto, ¿a qué situación pasarán en el puesto que venían desempeñando?

a. Excedencia forzosa.
b. Excedencia voluntaria.
c. Servicios especiales.
d. Comisión de servicios.

56. En relación con el personal al servicio de las Universidades, las referencias a las facultades que la Ley 53/1984 atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas se entenderán referidas al:

a. Gerente de cada Universidad.
b. Jefe/a de Servicio de Personal de cada Universidad.
c. Rector/a de cada Universidad.
d. Consejero/a de Universidades.

57. De acuerdo con la Ley 53/1984, ¿en qué casos se permite la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado?

a. Cuando tenga carácter permanente o habitual.
b. Cuando supongan más de setenta y cinco horas al año.
c. Cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año.
d. No se permite en ningún caso.

58. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señalar la causa de inadmisión a trámite correcta de solicitudes de acceso:

a. Información que para su divulgación no requiera acción previa de reelaboración.
b. Información ya elaborada o publicada.
c. Información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
d. Información que haga referencia a origen racial.

59. En relación con la solicitud de acceso a la información pública de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, señalar la respuesta correcta:

a. El procedimiento se iniciará de oficio por el titular del órgano administrativo o a solicitud del interesado.
b. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.
c. La ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
d. No es necesario concretar en la solicitud la información que se solicita.

60. En relación con la formalización del acceso a la información de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, señalar la respuesta correcta:

a. Si la información ya ha sido publicada, la resolución deberá indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
b. La expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones.
c. El acceso a la información y la expedición de copias serán gratuitas en todo caso.
d. El acceso a la información se realizará siempre por vía electrónica.

61. ¿Qué principio técnico al que se debe adecuar el Portal de Transparencia se corresponde con la siguiente definición en Ley 19/2013? "Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información".

a. Accesibilidad.
b. Interoperabilidad.
c. Integridad.
d. Reutilización.

62. Transcurrido el plazo máximo para resolver la solicitud de acceso a la información de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que:

a. La solicitud ha sido desestimada.
b. La solicitud ha sido estimada.
c. La solicitud ha sido estimada provisionalmente, hasta la notificación de la resolución definitiva.
d. El procedimiento se entiende suspendido hasta la notificación de la resolución definitiva en el plazo de 3 meses.

63. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 19/2013, ¿cuáles son las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

a. Adoptar recomendaciones y asesorar en materia de transparencia.
b. Asesorar en materia de educación y transparencia.
c. Informar sobre proyectos normativos de carácter local.
d. Evaluar el grado de aplicación de la publicidad del portal de transparencia

64. De acuerdo con la Ley 19/2013, la dirección de contacto que el solicitante de un acceso a la información pública ha de indicar en la solicitud será:

a. Preferentemente una dirección electrónica.
b. Obligatoriamente una dirección electrónica.
c. Preferentemente una dirección postal.
d. Obligatoriamente una dirección postal.

65. Es causa de inadmisión de una solicitud de acceso a la información de la Ley 19/2013:

a. Que esté dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información, cuando se desconozca el competente.
b. Que se refiera a información firme.
c. Que sea manifiestamente repetitiva o tenga un carácter abusivo justificado con la finalidad de transparencia de la Ley 19/2013.
d. Todas son correctas.

66. El solicitante de un acceso a información pública de la Ley 19/2013:

a. Se inadmitirá su solicitud si no indica los motivos.
b. Debe indicar los motivos en la solicitud, requiriéndose la subsanación en caso contrario.
c. Será indiferente, respecto a la resolución, que indique o no los motivos de su solicitud.
d. No está obligado a motivar su solicitud de acceso.

67. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (señala la INCORRECTA).

a. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
b. Al acceso a la información pública, archivos y registros.
c. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
d. A no ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

68. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no:

a. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
b. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las Administraciones Públicas.
c. No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las Administraciones Públicas.
d. Ninguna es correcta.

69. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse, según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (señala la INCORRECTA).

a. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
b. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
c. En las oficinas de asistencia en materia de registro.
d. En cualquiera de las oficinas del órgano al que se dirijan.

70. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Iniciados sólo a solicitud del interesado.
b. Cualquiera que sea su forma de iniciación.
c. Salvo caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud.
d. Salvo en los casos de prescripción o renuncia del derecho.

71. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será, según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

a. De diez días hábiles.
b. De un mes.
c. De tres meses.
d. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

72. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos expresados en días se contarán a partir de:

a. El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
b. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
c. El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
d. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

73. Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán, según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Por escrito a través de medios electrónicos.
b. Por escrito a través de medios no electrónicos.
c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
d. Verbalmente.

74. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:

a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

75. A tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

a. Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

76. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá (señala la INCORRECTA):

a. Contener el texto íntegro de la resolución.
b. Contener un extracto de la resolución.
c. Indicar si pone fin o no a la vía administrativa.
d. Indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan y el plazo para interponerlos.

77. Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando:

a. Los interesados en un procedimiento sean desconocidos.
b. Se ignore el lugar de la notificación.
c. Intentada la notificación no se hubiese podido practicar.
d. Todas son correctas.

78. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señala la INCORRECTA):

a. Los que lesionen los derechos o intereses susceptibles de recurso administrativo.
b. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c. Los que tengan un contenido imposible.
d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

79. A tenor del artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la INCORRECTA):

a. Que vulneren la Constitución.
b. Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
c. Que regulen materias reservadas a la Ley.
d. Que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales.

80. Respecto a la anulabilidad, según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
b. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
c. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto, en cualquier caso.
d. Todas son correctas.

81. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:

a. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.
b. A petición razonada de otros órganos.
c. Por denuncia.
d. Todas son correctas.

82. Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado las solicitudes que se formulen deberán contener, según el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señala la INCORRECTA):

a. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
b. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.
c. Hechos y razones de su solicitud, sin necesidad de concretar la petición.
d. Todas son correctas.

83. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67, u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de:

a. Cinco días.
b. Diez días.
c. Quince días.
d. Veinte días

84. A los efectos del artículo 69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad:

a. Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la documentación que así lo acredita.
b. Que pondrá a disposición de la administración la documentación cuando le sea requerida.
c. Que se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones anteriores durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
d. Todas son correctas.

85. Se entiende por expediente administrativo, a tenor del artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, excluyendo las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
c. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
d. El conjunto ordenado de diligencias que sirven de antecedente y fundamento al inicio del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

86. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

a. Cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
b. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
c. Cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
d. Diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.

87. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

a. En todo momento.
b. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación.
c. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

88. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

a. No superior a treinta días ni inferior a diez.
b. No superior a veinte días ni inferior a diez.
c. No superior a quince días ni inferior a diez.
d. No superior a treinta días ni inferior a veinte.

89. Salvo disposición expresa en contrario, a tenor del artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes serán:

a. Preceptivos y no vinculantes.
b. Facultativos y vinculantes.
c. Facultativos y no vinculantes.
d. Preceptivos y vinculantes.

90. Pondrán fin al procedimiento, según el artículo 84 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señala la INCORRECTA):

a. La resolución.
b. El desistimiento.
c. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico.
d. La declaración de caducidad.

91. Respecto a la resolución del procedimiento, NO es correcto, a tenor del artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá únicamente las cuestiones planteadas por los interesados.
b. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial.
c. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
d. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

92. Las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento, según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. De oficio únicamente, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
b. De oficio únicamente, cuando razones de interés público así lo aconsejen.
c. De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de orden público o la complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
d. De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

93. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

a. Apremio sobre el patrimonio.
b. Ejecución coercitiva.
c. Multa subsidiaria.
d. Compulsión sobre el patrimonio.

94. Podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas, a tenor del artículo 104 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
b. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida.
c. Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
d. Todas son correctas.

95. Bases de Ejecución Presupuestaria de la UAM: señalar qué característica NO tienen los presupuestos de la Universidad:

a. Público.
b. Equilibrado.
c. Único.
d. Plurianual.

96. En relación con la vinculación de los créditos y las Bases de Ejecución Presupuestaria de la UAM, señalar la respuesta correcta:

a. La clasificación por programas tendrá carácter vinculante.
b. La clasificación económica tendrá siempre carácter vinculante a nivel de subconcepto.
c. La clasificación orgánica tendrá carácter vinculante.
d. Todas las respuestas son incorrectas.

97. ¿De acuerdo con las Bases de Ejecución Presupuestaria, quién es responsable de elaborar el anteproyecto del presupuesto y planes económicos de la Universidad?

a. El Consejo de Gobierno.
b. El Consejo Social.
c. El Gerente.
d. El Servicio de Contabilidad.

98. ¿Qué tipo de modificaciones presupuestarias puede aprobar el Gerente de la Universidad según la delegación del Consejo Social en los supuestos de generaciones e incorporaciones de crédito?

a. Las que excedan de 30.000 euros.
b. Las que no excedan de 30.000 euros.
c. Todas las modificaciones presupuestarias.
d. Ninguna de las anteriores.

99. De acuerdo con las Bases de Ejecución Presupuestaria, con cargo a los anticipos de caja fija podrán tramitarse gastos cuyo importe sea igual o inferior a:

a. 5.000 €, IVA incluido.
b. 3.000 €, IVA incluido.
c. 5.000 €, IVA excluido.
d. 3.000 €, IVA incluido.

100. ¿Qué tipo de clasificación del estado de gastos del presupuesto se corresponde con la asignación de recursos dentro de una estructura funcional por actividades?

a. Clasificación orgánica.
b. Clasificación por programas.
c. Clasificación económica.
d. Clasificación contable.

P R E G U N T A S D E R E S E R V A

101. De acuerdo con las Bases de Ejecución Presupuestaria, la competencia para aprobar las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de gastos corrientes y de gastos de capital que excedan del 5 por 100 del monto total del capítulo afectado corresponde a:

a. Rector/a.
b. Consejo de Gobierno.
c. Consejo Social.
d. Comunidad de Madrid.

102. En relación con los gastos de carácter plurianual y de acuerdo con las Bases de Ejecución Presupuestaria, señalar la respuesta correcta:

a. El número de ejercicios a que pueden aplicarse estos gastos no será superior a cuatro
b. En ningún caso se podrá acordar la modificación de los porcentajes o incrementar el número de anualidades
c. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación el 50% en cada uno de los ejercicios
d. El número de ejercicios a que pueden aplicarse estos gastos no será superior a cinco

103. ¿Qué tipo de modificación de crédito se tramitaría cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado?

a. Suplementos de crédito.
b. Generaciones.
c. Ampliaciones.
d. Crédito extraordinario.

104. La inamovilidad en el puesto de trabajo:

a. Es un derecho del empleado público según el artículo 14 del TREBEP.
b. No es un derecho del empleado público según el artículo 14 del TREBEP.
c. Es un derecho del empleado público si el puesto fue obtenido por concurso de méritos.
d. Es un derecho del empleado público si el puesto fue obtenido por oposición libre.

105. ¿Cuál es la modalidad de carrera profesional que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior?

a. Promoción interna horizontal.
b. Carrera vertical.
c. Promoción interna vertical.
d. Carrera horizontal.

_____